



**PARLAMENTO  
ABIERTO**

La voz de la ciudadanía

**REVISTAS ALDF**

Para su consulta vía Internet ingresa a la página

**[www.aldf.gob.mx](http://www.aldf.gob.mx)**

## Gobierno de coalición



López Adame |  
Transparencia y  
cooperación.

Dentro de dos semanas iniciarán los foros con especialistas de diversos centros de estudios para armonizar la nueva Ley de Gobernabilidad del Ejecutivo de la Ciudad de México: la comisión respectiva trabaja para aprobar a tiempo la ley que regirá las funciones del primer gobernador capitalino, al tiempo que se diseñan las funciones del gabinete poniendo especial atención en dos cosas: transparencia y cooperación con las autoridades.

“La comisión tiene gran interés en conocer la experiencia de los especialistas de diversas instituciones, como el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la UAM, el ITAM, el CIDE y otros. Queremos que nos hablen sobre todo de las experiencias internacionales en materia de gobiernos de coalición, principalmente las relaciones Ejecutivo-Legislativo, para impulsar una ley que le dé gobernabilidad a la ciudad, no solo cumplir con hacer una ley secundaria”, dice el diputado Xavier López Adame, del Partido Verde, presidente de la comisión que tiene a su cargo la ley secundaria del Ejecutivo local.

Una ley  
que le dé  
gobernabilidad  
a la ciudad.

Una tarea nada fácil: se tiene como marco la Constitución federal y se debe trabajar tomando en cuenta los preceptos que esta señala, pero la armonización tendrá que incluir las facultades adicionales del primer gobernador de la ciudad de acuerdo también a lo que señala la nueva Constitución local. ¿Cómo ve?

“También llevaremos a cabo otros foros y mesas de trabajo con diputados para diseñar junto con los funcionarios públicos encargados de las materias relevantes, porque se crean muchos institutos que van a ser autónomos y hay que establecer sus funciones. Por eso vamos a ir debatiendo qué queremos en cada materia, buscando dos cosas: transparencia y cooperación con las autoridades para un mejor funcionamiento”, comenta el legislador del PVEM.

Entre esos institutos López Adame destaca dos: “Uno de ellos es el de Planeación y en este caso no debemos darle más facultades de las que le otorga la Constitución local, sino acotarlas exclusivamente a esos señalamientos a efecto de que eventualmente no choque con disposiciones que podrían ser del Congreso local o del Poder Ejecutivo; y el otro es el de Defensoría Pública, que absorbe las funciones de lo que hoy es la Consejería Jurídica y tendrá autonomía en sus funciones. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México también será un organismo autónomo. Y muchos otros”.

Todo indica que el cambio es total. Muchos organismos nuevos. Otros

LA ESCALERA DE LAURA

Laura Quintero  
laura\_quintero2003@yahoo.com.mx



con autonomía. Y rigurosos controles para un buen ejercicio de gobierno. ¿Qué le parece?

La tarea es minuciosa. Y el tiempo es poco. Por ello deben trabajar a marchas forzadas en sacar una ley secundaria de vanguardia que pueda irse perfeccionando para que resulte lo más funcional posible. ¡Veremos!

### El bolso de Laura...

Ahora le cuento que la constructora Banca Mifel otra vez está en el ojo del huracán por las obras irregulares que levanta. Tiene clausurada desde hace varios meses la de Altavista e Insurgentes. Ahora le detectan la obra que construye en el vaso regulador de la Presa Anzaldo, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 3042, Delegación Álvaro Obregón, que carece de estudio de impacto ambiental. Y para rematar se encuentra en un área de valor ambiental dentro de la Ciudad de México. Y el diputado ecologista Fernando Zárate Salgado clama por la clausura. ¡Al tiempo!... Un grupo de diputados y funcionarios que busca alternativas contra la corrupción abrirá la Audiencia Ciudadana que pretende que se avance de manera más acelerada en la rendición de cuentas. Lo encabeza el panista Ernesto Sánchez, presidente de la Comisión de Transparencia de la ALDF. Es un novedoso ejercicio que hay que seguir de cerca, dicen los que saben, porque si algo es cierto es que la población no soporta más la corrupción. ¿Será?... V

# La controversia constitucional en materia de monumentos

BOLFY COTTOM

**E**l pasado 17 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió los recursos de impugnación de diversos artículos de la recién publicada Constitución de la Ciudad de México. Me ocuparé aquí del artículo 18, "Patrimonio de la Ciudad", objetado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a través de una controversia constitucional.

A juzgar por las declaraciones a diversos medios del consejo jurídico, Humberto Castillejos, dicho órgano presentó la controversia por considerar que la Constitución invade competencias exclusivas del Congreso de la Unión. Al respecto, vale la pena considerar:

1.- En el proceso de elaboración de la Constitución CDMX, hubo un texto primigenio propuesto por el Ejecutivo de la Ciudad —el cual fue resultado de una serie de consultas hechas por la Secretaría de Cultura de dicho gobierno— que respetaba con mucha claridad el régimen de competencias federal y local en lo referente al patrimonio cultural, dejando claras las facultades del gobierno federal sobre los monumentos de interés nacional. Pero esa redacción fue desdenada por la Comisión de Desarrollo Sostenible (CDS) que, inexplicablemente, asumió el procesamiento de esta materia, cuando es claramente de carácter educativo-cultural, no de economía.

Y digo inexplicablemente porque en la historia del país el tema del patrimonio cultural (que incluye como una parte importante los monumentos) siempre se ha considerado de servicio público y de carácter educativo; asumirlo desde la perspectiva desarrollista lo convierte en un tema económico muy peligroso pues lo considera como una mercancía más.

2.- En esa lógica, hay que matizar la impugnación del artículo 18, con la idea de hacer justicia a una facultad que sí tiene el gobierno de la Ciudad. Entiendo que la Consejería Jurídica controvierte una parte del artículo. La Constitución CDMX legisla en materia de monumentos

arqueológicos, históricos, artísticos y paleontológicos que concretamente se abordan en el numeral 3 del artículo, que dice: El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial.

Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría de protección.

El numeral citado es un galimatías lleno de arbitrariedades conceptuales jurídicas y de confusión de facultades que hacen desaparecer sus certezas y bondades. La primera parte del enunciado es correcta; sin embargo, el registro del patrimonio histórico es de interés nacional, por tanto facultad del gobierno federal, ya legislado en la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, según la base de la fracción XXV del artículo 73 constitucional. Certo es que establece el condicionante de que sea conforme a la ley en la materia, pero no especifica a qué ley se refiere, si local o federal, sobre todo porque de manera arbitraria establece una clasificación muy ambiciosa y confusa referente a múltiples patrimonios, cuando en algunos casos como el llamado patrimonio inmaterial tomado de la Convención de la UNESCO de 2003, y de acuerdo con

el artículo 124 constitucional que ahora aplica a la Ciudad de México, es competencia de los gobiernos estatales o el llamado patrimonio natural que obviamente constituye una materia distinta del patrimonio cultural.

Llega a la desmesura de establecer otras clasificaciones que jurídicamente no existen y aún son motivo de fuertes discusiones académicas como el patrimonio rural y urbano territorial, o los llamados paisajes o rutas culturales que pueden ser cualquier cosa, además de que involucrará diversos sectores de la administración pública local

e incluso federal. Tal ha sido el caos que ha representado la vigente Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del D. F. (sic). Pero me parece que, en el caso de la impugnación, la razón jurídica le asiste al gobierno federal cuando en ese

mismo numeral y artículo dice la Constitución-CDMX que: Esta misma ley (supongo que se refiere a la ley secundaria que se elabore a partir de la Constitución) establecerá la obligación de la preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos, que se encuentren en su territorio, así como espacios naturales, rurales con categoría de protección. (no define categoría de protección, en todo caso tendría que decir con declaratoria).

Esto es inconstitucional e ilegal; jurídicamente todo patrimonio arqueológico es competencia exclusiva del Gobierno Federal y para su protección se establecieron los conceptos de Zona de Monumentos Arqueológicos y de igual manera Paleontológicos por la Ley Federal sobre Monumentos. Indistintamente de si son bienes muebles o inmuebles son propie-

dad de la Nación, y para el caso de los monumentos artísticos e históricos de interés nacional, también pueden constituir Zonas de Monumentos y pueden ser de distinto régimen de propiedad, pero no existe el concepto arbitrario de conjuntos arqueológicos, artísticos o paleontológicos que señala el artículo 18. Respecto de los espacios naturales o rurales (dos conceptos no comparables) con categoría de protección, es tal la arbitrariedad que no se sabe a qué se refieren. No tienen idea del impacto que tendría en el diseño de políticas públicas y en el presupuesto para su atención.

3.- Sin embargo, pese a estos problemas, me parece que la razón legal no le asiste a la Consejería Jurídica, cuando se refiere genéricamente tanto a los monumentos históricos como a los artísticos (insisto, lo arqueológico y lo paleontológico es propiedad nacional y de jurisdicción federal).

Las entidades federativas sí pueden poseer, considerar y declarar "bienes históricos y artísticos de interés local", aquellos que representen su historia y cultura locales, ni la Constitución ni la ley federal en la materia se los prohíben; de hecho en diversas entidades existen leyes que declaran sus propios monumentos históricos y artísticos de interés local, siempre y cuando no se refieran a los de propiedad o interés nacional.

4.- Tampoco se puede impugnar la facultad del Gobierno de la Ciudad de legislar en materia de patrimonio cultural, puesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de patrimonio cultural, sino sobre monumentos arqueológicos, paleontoló-



Fecha 17-ABR-2017

Página

66-67

Sección

Política

Como lo resume el autor de este artículo, el abogado e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la recién publicada Constitución de la Ciudad de México ha sido objeto de una impugnación por parte del gobierno federal. Aquí se analizan algunos puntos del artículo 18 que, a su juicio, resultan arbitrarios, como el concepto de "conjuntos arqueológicos, artísticos o paleontológicos", un galimatías. Paralelamente, se extraña que el documento deje al Centro Histórico, en su dimensión cultural, en manos de la llamada Autoridad de éste, por encima de la Secretaría de Cultura.

gicos, históricos y artísticos cuya conservación sea de interés nacional; por ende la materia del patrimonio cultural en su sentido amplio, excepto la fracción XXV del artículo 73, es facultad del gobierno local de acuerdo con el artículo 124 constitucional. Puede declarar sus propios monumentos locales, lenguas, tradiciones, fiestas populares, instituciones y todo aquello que se denomina patrimonio intangible. Por ello afirmo que no todo el artículo 18 puede ser controvertido.

5.- Otra parte de la Constitución CDMX con problemas es el apartado B del mismo artículo 18. Es contradictorio en sus numerales 1 y 2. Por un lado establece la coordinación en la adopción de medidas para la conservación y gestión de los sitios declarados patrimonio de la humanidad. Pero en el numeral 2, segundo párrafo, señala que en los términos de la Ley (no es explícita a qué ley se refiere y supongo de nuevo que será la ley secundaria que el congreso de la CDMX llegue a expedir) el Centro Histórico de la Ciudad de México quedará bajo la responsabilidad directa del Jefe de Gobierno a través de la Autoridad del Centro Histórico, en todo lo que respecta a la regulación urbana, intendencia, mantenimiento, renovación, restauración y conservación de inmuebles y monumentos históricos. Es claro que se extralimita al olvidar que los bienes Patrimonio de la Humanidad, en este caso, monumentos arqueológicos o históricos, lo son porque antes han tenido una declaratoria de orden federal como zonas de monumentos. Es el caso de los centros históricos, de tal manera que en los rubros de restauración y conservación es el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia,

quien tiene facultades que no puede invadir el gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, es discutible el establecimiento de políticas especiales para el llamado Patrimonio de la Humanidad. Jurídicamente me parece ilegal establecer disposiciones especiales para este patrimonio puesto que, en estricto sentido, una declaratoria de este tipo parte de la condición de que exista ya una protección legal en el país que la solicita.

Considero de trascendental importancia apegar al espíritu y contenido expreso del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así se podrá confiar firmemente en que la resolutoria de la SCJN confirmará las competencias de ambos órdenes de gobierno, de tal manera que su determinación ayudará a fortalecer no sólo nuestro maltrecho Estado de Derecho, sino a preservar aquellos bienes culturales que tanto valor representan para nuestro país y nuestra ciudad. ●

# El modelo cultural de la Ciudad de México

Para Sergio González Rodríguez.  
In memoriam.

JORGE SÁNCHEZ CORDERO\*

**L**a Constitución de la Ciudad de México plantea un modelo cultural vanguardista, plétora de libertades y derechos culturales, a contracorriente de los tiempos opresivos y la profusión de posturas reaccionarias que vive la República. En esa forma, la Asamblea Constituyente hizo de esta nueva entidad federativa un sólido enclave para el ejercicio de la democracia cultural, ante la franca hostilidad del *apparatchik* cultural y de grupos conservadores que observan con desdén este proyecto.

El poder revisor de la Constitución general -la instancia legitimada para aprobar estas reformas- dispuso a favor del Congreso General la competencia legislativa en lo relativo al patrimonio cultural material (artículo 73, fracción XXV). Este logro -basado en la idea sustantiva de uniformar la protección de ese legado en todo el territorio nacional- fue la culminación de un largo proceso, que se extendió durante los siglos XIX y parte del XX, plagado de vicisitudes.

Por el contrario, la Constitución general reservó el patrimonio cultural intangible a las entidades federativas, bajo el supuesto de que éstas, y consecuentemente los municipios, se hallan en contacto directo con este prototipo de expresiones culturales. El poder revisor circunscribió la participación del Congreso general para fijar -única y exclusivamente- las bases de coordinación cultural entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y los mecanismos de participación de los sectores social y privado.

El modelo cultural de la Ciudad de México tiene varias premisas, entre ellas la relativa a la libertad del arte y de la ciencia, así como la del acceso irrestricto de cada grupo o comunidad a la cultura, que debe entenderse la y la de un esquema omnicompreensivo y progresivo de derechos culturales. Las premisas fundacionales no fueron objeto ni de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, ni de la controversia constitucional por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia ni la del Senado de la República, con lo que se asegura todo el fulgor de este modelo cultural.

## El acceso irrestricto a la cultura

El modelo objeto de análisis encuentra su punto de origen en la admisión de la diversidad y heterogeneidad de las identidades culturales de individuos y de comunidades en la circunscripción de la Ciudad de México para reafirmar su la vocación incluyente de ésta. El derecho a la diversidad cultural es una de las ma-

neras de asegurar el respeto a la dignidad humana. Las culturas carecen de fronteras, y en asociación con ello la ciudad ha sido epítome de migración, integración y asimilación culturales, que han sido fenómenos sociales recurrentes en la demarcación de la zona metropolitana.

El postulado del Constituyente encuentra su expresión en el acceso irrestricto a la cultura individual y comunitaria. Para ello ordenó un tránsito -sin cortapisas- a los bienes y servicios culturales, que son los vectores de identidad, valores y significados cuya expresión, por mandato constitucional, están al resguardo de toda censura.

No debe soslayarse que la discriminación es un obstáculo determinante para la viabilidad de las libertades culturales y el pleno ejercicio de los derechos culturales. Más lo es, sin embargo, la que se observa por la negativa a pertenecer a un grupo o comunidad cultural determinados.

Ante ello, la Constitución capitalina desarrolla mecanismos de protección en favor de los grupos tradicionalmente vulnerables, entre éstos a aquellos cuya vida cultural se funda en la preservación, promoción y desarrollo de su propia cultura. El modelo constitucional capitalino les asegura a estos núcleos la plena libertad en términos de diversidad cultural, tradiciones, costumbres, lengua y medios de expresión, y simultáneamente la remoción de formas estructurales que propicien la discriminación por

una insuficiente participación de los grupos y comunidades culturales en la vida cultural.

## Libertades y derechos culturales

El diseño progresivo de los derechos culturales participa de una gran vastedad. Éstos se hallan previstos en forma expresa en la nueva Constitución y deberán ser eventualmente desplegados en toda su magnitud por el órgano legislativo de la ciudad (artículo 8 inciso D), esquema que se ve adosado con las Opiniones Generales elaboradas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que el Estado mexicano es parte. Estas Opiniones Generales, específicamente la número 21, resultan ahora vinculantes para la ciudad. En efecto la Asamblea Constituyente dispuso la puntual observancia de los instrumentos internacionales en la materia, "así como sus reglas y directrices operativas, Observaciones Generales, comentarios y criterios interpretativos oficiales".

A través de esta fórmula constitucional se le da operatividad en la Ciudad de México al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15), que en esta materia tenía solamente efectos como una declaración de principio. Con ello se busca neutralizar la reticencia del gobierno de México a ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto, que lo obligaría a someterse a un escrutinio internacional de cumplimiento, amén de tener que rendir información.

Conforme a este modelo cultural, la idea motriz es sin duda la

libertad en lo que respecta a la participación en la vida cultural, que abrevia del postulado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual dispone toda persona tiene derecho a tomar parte de manera libre en la vida cultural de la comunidad.

Esta libertad conlleva una obligación, por parte del gobierno de la ciudad, de doble naturaleza: abstenerse de cualquier injerencia en las prácticas culturales y en el acceso a los bienes culturales (obligación de no hacer), así como adoptar las medidas positivas que aseguren la participación en las expresiones culturales, la promoción de éstas y el acceso a los bienes culturales (obligación de hacer).

La libertad de elección cultural es la otra cara de Jano en la Constitución capitalina: a toda persona, grupo o comunidad les asiste la libertad fundacional, consistente en la afirmación o negación de su participación en la vida cultural.

Para sustantivar la plena realización de estas libertades se dispuso de un esquema progresivo de derechos culturales. Al respecto merecen una reflexión la *determinabilidad* del sujeto y la noción de participación en la vida cultural.

El sujeto de los derechos culturales es individual o colectivo; es individual en su origen, pero colectivo en su destino. Este modelo cultural es, por lo tanto, consistente con el desarrollado en forma jurisprudencial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Si bien se podría sugerir que este paradigma jurisprudencial estuviera circunscrito a las comunidades indígenas, ahora la Constitución de la ciudad lo configura explícitamente en su modelo y lo hace extensivo a todos los grupos o comunidades culturales, a los cuales les reconoce personalidad jurídica en forma reiterada. Éstos tienen el derecho a ser reconocidos en la forma en la que determinen, mientras que a los patrimonios material e intangible se les da el carácter de interés y utilidad públicos, con las consecuencias legales correspondientes.

La participación en la vida cultural merece igualmente una consideración: la Constitución capitalina se abstiene con acierto

de recurrir a definiciones y abandonó toda pretensión de convertirse en un texto escolar. Antes al contrario, participa del axioma de que la vida cultural es un concepto holístico que agrupa a todas las manifestaciones de la existencia humana.

La misma expresión es una referencia explícita de que cultura es un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo cuyo pasado se recrea en la memoria colectiva presente para transmitirse a las generaciones futuras. Más aún, ello confronta claramente la pretensión del *apparatchik* cultural de imponer desde la cúspide un modelo con vanos propósitos de control centralista y que desestima la heterogeneidad de las culturas mexicanas, cuando justamente la generación de expresiones culturales es un fenómeno rizomático.

La cultura no la constituye una serie de manifestaciones deshilvanadas o de estancos herméticos e incommunicados, y menos aún de meros eventos. Supone un proceso interactivo e incluye de expresiones específicas, o bien heterogéneas e individuales, de los grupos y de comunidades que conforman nuestras culturas y que se infiltran en los valores que orientan la vida cotidiana.

Otra de las nociones básicas en la materia se relaciona con la forma de participación en la vida cultural, aspecto que comprende tres elementos de composición: la participación, el acceso y la contribución a la vida cultural.

La noción de participación debe ser entendida en su expresión más amplia: a toda persona, grupo o comunidad les asiste, entre otros, el derecho a escoger su identidad, ejercer a plenitud sus propias prácticas culturales y expresarse en su propia lengua. El acceso a la vida cultural implica la libertad de conocer y comprender la cultura con acierto y, con ello, optar por un estilo determinado de vida. Finalmente, la contribución a la vida cultural entraña asegurar la participación en el desarrollo comunitario y la definición, formulación e implementación de los derechos culturales que le son propios.

## Las obligaciones

El modelo cultural de la Constitución de la Ciudad de México obliga al gobierno local a asegurar algunos elementos básicos: la disponibilidad de los bienes y servicios culturales; la accesibilidad de oportunidades efectivas y concretas para que individuos, grupos y comunidades puedan desarrollar su cultura; la aceptabilidad de sus políticas públicas por parte de los destinatarios, las cuales deben variar conforme a los entornos y diversidades culturales, así como la adaptabilidad, que exige la flexibilidad, pertinencia e idoneidad de las políticas públicas, ya que éstas deben ser aptas para contextos culturales específicos.

Lo anterior demanda de los grupos o comunidades culturales participar, de manera activa, igualitaria e informada y sin discriminación, en los procesos de adopción de decisiones que puedan repercutir en su forma de vida o alterar el ejercicio de sus derechos culturales.

Las obligaciones culturales interrelacionadas son el respeto, la protección y el cumplimiento. El gobierno de la ciudad debe ceñirse a este primer vértice, que supone abstenerse de interferir, directa o indirectamente, en el uso y goce de la vida cultural, ya sea del individuo, del grupo o de la comunidad cultural. Con ello se asegura la libre expresión de la identidad cultural y la realización de las más diversas prácticas culturales.

En el caso de la protección, el gobierno de la ciudad está obligado a impedir que diferentes actores sociales interfieran en el derecho a la participación en la vida cultural, mientras que en lo relativo al cumplimiento se le exige proveer medidas legislativas, administrativas y presupuestarias suficientes para promover y asegurar el

desarrollo efectivo del modelo cultural referido. Esta obligación se desdobra por lo tanto en funciones tan relevantes como la facilitación, la promoción y el otorgamiento de toda clase de medios.

## La democracia cultural

El modelo cultural de la Constitución constituye un esfuerzo significativo para vincular identidad y memoria colectiva, cultura y política, en los grupos y comunidades de la Ciudad de México, así como la forma en que pueda tener realización la democracia cultural. Además articula el vínculo entre identidad y territorio urbano y rural, y, más aún, entre cultura y territorio.

La dimensión cultural es un componente esencial de la política territorial en este modelo, en el que cobra singular importancia la territorialidad de las políticas culturales. En efecto, la política cultural se orienta ahora en función de las especificidades territoriales y entornos sociales. En este modelo, al territorio se le conceptualiza no solamente en su sentido geográfico, sino también en el ámbito de la intervención social. La idoneidad de la política cultural exige, pues, un fundamento de territorialización.

El modelo cultural debe comprenderse en función de las especificidades propias de la Ciudad de México, entidad multicultural que aspira a ser policéntrica y cuyas notas culturales distintivas son la gran diversidad de públicos y de prácticas culturales. Nada más erróneo que considerar al corpus cultural como un conglomerado monolítico y uniforme.

Una de sus piedras angulares es sin duda la democratización de la cultura, lo que implica que todas las categorías sociales

tengan acceso igualitario y efectivo a esta última. La democratización de la cultura se convierte así en el fundamento de la acción cultural. En efecto, el Constituyente transitó de una democracia deliberativa a una democracia cultural, ahora inserta en la Constitución de la Ciudad de México.

El modelo cultural capitalino excluye al prevaleciente, que reconoce una jerarquía cultural rígida reflejo de una sociedad diferenciada como la nuestra y cuyo efecto es la profundización de la estratificación social. Asimismo, supera las desigualdades cul-



Fecha 17-ABR-2017

Página

55-57

Sección

Política

turales persistentes y sus determinismos sociales, y a través de la democracia cultural termina por atribuirle a la función social de la cultura un significado diferente.

No obstante ello, debe reconocerse que la democratización de la cultura es aún un proyecto inconcluso, según lo define la fórmula de Jürgen Habermas. Para mencionar lo obvio, la sociedad mexicana se distingue por la diferencia marcada de sus clases sociales y por la inequidad de los recursos y competencias culturales. En la composición de esta sociedad destaca el perfil, tan diverso como contradictorio, de los públicos que militan en el espectro social.

Por lo anterior, el modelo cultural de la Ciudad de México obliga a las instancias culturales locales al análisis de los comportamientos culturales, de la validez de los métodos empleados y de la evaluación de los resultados obtenidos, que no es otra cosa que el escrutinio de las políticas en la materia. Por lo tanto, el modelo constitucional capitalino se sustrae de la retórica oficialista estéril, que carece de la mínima legitimidad cultural. ☺

\*Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.